

EDITORIAL

LA INTENCIONALIDAD DE LOS INCENDIOS EN LA ARAUCANÍA

El origen de los incendios en La Araucanía y su relación con reivindicaciones territoriales de grupos extremos vuelve a tomarse la agenda pública.

Esta semana hemos visto a las autoridades de Gobierno y sus propios correligionarios enfrentarse en un debate que poco tiene que ver con frenar estas acciones y establecer medidas efectivas para que estos hechos y sus complejas consecuencias, no se vuelvan a repetir

año tras año, como ha sido la tónica de los últimos períodos. Y, más bien, la discusión se ha centrado en el poco cuidado de algunas autoridades de La Moneda, al emitir declaraciones que eventualmente pueden estigmatizar a comunidades de la zona.

Ciertamente que las formas y tonos son importantes. Pero, en este caso, la evidencia es clara: la intencionalidad en este tipo de siniestros puede llegar a un 90%, de acuerdo a cifras de la Multigremial (con datos recopilados la temporada anterior) y, justamente, se concentran en los mismos territorios donde históricamente grupos extremos o terroristas han reivindicado el fuego como herramienta de presión.

Este año, nuevamente son miles de hectáreas arrasadas

que vienen a engrosar la larga lista de afectaciones que generan las acciones violentas en la región. Un saldo negativo de millones de dólares, cultivos perdidos, paralización de actividades productivas y otros tantos daños difíciles de cuantificar y donde hay poco o nada para recuperar. Eso, sin contar el profundo temor que despiertan estos actos en las comunidades afectadas y el mundo empresarial.

Los territorios en cuestión llevan tres años bajo sucesivas

declaraciones de Estado de Excepción Constitucional y si bien han bajado los hechos de violencia y su periodicidad, los incendios intencionales siguen siendo una constante durante el verano.

Solo este año, La Araucanía encabeza el ranking de superficie quemada con 22.673 hectáreas, muy por detrás la siguen la región de O'Higgins con 4.831 hectáreas y en tercer lugar, la Región Metro-

politana con 4.720 hectáreas, según cifras de Conaf (temporada 2024-2025).

Urge que se detengan estos actos delincuenciales de gran impacto, que se lleven a cabo las investigaciones, se encuentren y condenen a los responsables y, sobre todo, que se reestablezca la seguridad y tranquilidad para la ciudadanía. Es momento de actuar, eso es lo que demandan las comunidades y deberían ser la prioridad de las autoridades.

“La intencionalidad en este tipo de siniestros puede llegar a un 90% (...) y, justamente, se concentran en los mismos territorios donde históricamente grupos extremos o terroristas han reivindicado el fuego como herramienta de presión”.